

Política integral y lineamientos de atención psicosocial migratoria

Breve descripción:

Este componente formativo aborda los fundamentos de la política migratoria colombiana y el marco normativo nacional e internacional que orienta la atención psicosocial dirigida a personas migrantes, población colombiana retornada y comunidades de acogida. También se revisan los derechos fundamentales y la aplicación de principios humanitarios para promover una intervención psicosocial integral, ética y enfocada en la protección de la dignidad humana.

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Contexto general de la migración y su impacto psicosocial	7
1.1. Causas y tipos de migración.....	8
1.2. Migración internacional y retorno en Colombia.....	10
1.3. Impactos psicosociales de la migración.....	11
1.4. Respuesta institucional frente al fenómeno migratorio	12
2. Marco normativo internacional sobre migración y atención psicosocial	14
2.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948)	15
2.2. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y Protocolo (1967)	16
2.3. Convención sobre los Derechos del Niño (1989).....	17
2.4. Enfoque de protección y dignidad humana (ACNUR)	19
3. Marco normativo nacional de la política migratoria colombiana y atención psicosocial	20
3.1. Política Integral Migratoria (Ley 2136 de 2021).....	23
3.2. Estatuto Temporal de Protección (Decreto 216 de 2021)	24
3.3. Ley del Retorno (Ley 1565 de 2012).....	25
3.4. Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006)	28

3.5.Política Nacional de Salud Mental (Ley 2460) y lineamientos de atención psicosocial (Decreto 0729 de 2025)	30
Síntesis	33
Material Complementario	34
Glosario	35
Referencias bibliográficas	37
Créditos	40

Introducción

La migración es un fenómeno social y humano que implica el desplazamiento de personas en busca de mejores condiciones de vida. Este componente aborda el análisis de la política migratoria y del marco legal que orienta la atención psicosocial dirigida a la población migrante, la población colombiana retornada y las comunidades de acogida.

A lo largo de este estudio, el aprendiz comprende cómo las políticas migratorias, los derechos humanos y los principios humanitarios guían las acciones de protección, asistencia e inclusión social en contextos de movilidad humana.

Asimismo, se profundiza en la Política Integral Migratoria de Colombia, en los tratados y convenciones internacionales sobre migración y refugio, y en los derechos y deberes que sustentan la atención psicosocial desde un enfoque ético, intercultural y basado en derechos humanos.

Para comprender la importancia del contenido y los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video:

Video 1. Política integral y lineamientos de atención psicosocial migratoria



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: Política integral y lineamientos de atención psicosocial migratoria

En Colombia, la migración es un fenómeno social que transforma territorios, familias y comunidades. Las personas migran por diversas causas como la búsqueda de oportunidades, la reunificación familiar o situaciones de emergencia que ponen en riesgo su vida. Este proceso puede ser voluntario o forzado, temporal o definitivo, e incluye tanto a quienes llegan al país como a los colombianos que retornan desde el exterior.

La migración tiene efectos emocionales y sociales. Implica duelos, adaptación cultural, pérdida de vínculos y desafíos en el acceso a derechos, pero también abre

oportunidades de crecimiento y construcción de proyectos de vida. Por ello, la atención psicosocial es fundamental para fortalecer el bienestar y la integración de las personas migrantes, retornadas y las comunidades que las reciben.

El marco internacional, liderado por Naciones Unidas, establece principios de protección y dignidad humana para la movilidad humana. Instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención sobre los Derechos del Niño reconocen que ninguna persona debe ser discriminada por su origen o condición migratoria.

En Colombia, el país ha consolidado normas que garantizan derechos y rutas de atención. Entre ellas se destacan la Política Integral Migratoria, el Estatuto Temporal de Protección para la población venezolana, la Ley del Retorno y el Código de Infancia y Adolescencia. De igual manera, la Política Nacional de Salud Mental fortalece la atención psicosocial con enfoque diferencial para quienes enfrentan este proceso.

Promover una convivencia solidaria, inclusiva y respetuosa es esencial para que todas las personas puedan reconstruir su vida con bienestar y dignidad.

1. Contexto general de la migración y su impacto psicosocial

La migración es un fenómeno humano y social complejo que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. Implica el desplazamiento de personas o grupos desde un lugar de origen hasta un nuevo destino, de manera temporal o permanente, motivado por razones económicas, políticas, sociales, ambientales o de seguridad (OIM, 2019). Este proceso, además de modificar la estructura demográfica de los países, transforma las dinámicas familiares, la cultura, los valores comunitarios y las percepciones de identidad tanto en la población migrante como en las comunidades receptoras.

Este fenómeno no se reduce únicamente al movimiento físico entre territorios, sino que también constituye una experiencia emocional profunda que puede generar esperanza, incertidumbre, pérdida y adaptación. El aumento constante de los desplazamientos humanos en las últimas décadas refleja la persistencia de factores como la desigualdad, los conflictos armados, los desastres naturales y las crisis económicas globales. Según Naciones Unidas (s. f.), más de 280 millones de personas viven actualmente fuera de su país de origen, lo que evidencia la magnitud de esta realidad global.

En Colombia, la migración se caracteriza por su multidimensionalidad: el país es simultáneamente territorio de origen, tránsito, destino y retorno. Históricamente, ha experimentado la salida de nacionales por motivos económicos y de seguridad; al mismo tiempo, se ha consolidado como lugar de acogida para personas extranjeras, especialmente provenientes de Venezuela. Esta dinámica plantea importantes retos en materia de derechos humanos, atención humanitaria, inclusión social y acompañamiento psicosocial (DNP, 2022).

El impacto psicosocial de la migración se refleja en la manera en que las personas enfrentan los cambios y desafíos que se derivan del proceso migratorio. El duelo por lo dejado, la nostalgia, el estrés de adaptación y la ruptura de redes de apoyo pueden afectar la salud mental e influir en la integración social. A su vez, las comunidades receptoras pueden experimentar tensiones asociadas a la diversidad cultural o a la percepción de competencia por los recursos, lo que exige promover acciones que fortalezcan el respeto, la empatía y la convivencia.

Por ello, comprender el contexto de la migración permite analizar sus causas, sus efectos y las respuestas institucionales orientadas a una atención psicosocial basada en los derechos humanos, la equidad y la dignidad de las personas (ACNUR, 2017).

1.1. Causas y tipos de migración

Colombia ocupa un lugar particular dentro de la dinámica migratoria mundial, al actuar simultáneamente como país de origen, tránsito, destino y retorno. Esto implica que miles de colombianos migran al exterior por razones sociales, económicas o de seguridad, mientras que el país también recibe un número creciente de personas extranjeras, principalmente provenientes de Venezuela (DNP, 2022).

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2023), en Colombia residen más de 2,8 millones de personas migrantes, siendo la mayoría de nacionalidad venezolana. Esta realidad plantea desafíos en materia de:

- ✓ Acceso a servicios básicos (salud, educación y alimentación).
- ✓ Inclusión laboral y económica.
- ✓ Garantías de protección y regularización migratoria.
- ✓ Integración comunitaria y convivencia intercultural.

Además, Colombia también enfrenta el fenómeno del retorno, es decir, el regreso de nacionales que residían en otros países y vuelven por motivos como los establecidos en la Ley 1565 de 2012:

- ✓ Crisis económicas en los lugares de destino.
- ✓ Reunificación familiar.
- ✓ Dificultades para regularizar su estatus migratorio.
- ✓ Situaciones de discriminación o inseguridad.

El país ha adoptado medidas normativas y humanitarias para garantizar los derechos de las personas migrantes y retornadas, entre ellas:

- ✓ **Ley 2136 de 2021:** Política Integral Migratoria. Promueve una movilidad humana ordenada, segura y regular, basada en la inclusión social, el acceso a derechos y la atención psicosocial.
- ✓ **Decreto 216 de 2021:** Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). Facilita la regularización migratoria y el acceso a salud, educación y empleo formal.
- ✓ **CONPES 4100 de 2022:** articula las acciones institucionales para fortalecer la integración y el bienestar de la población migrante.

Estas políticas se complementan con acciones territoriales y comunitarias orientadas a fortalecer la convivencia y la cohesión social.

La gestión migratoria no depende únicamente de políticas públicas, sino también de una mirada humana y un enfoque psicosocial. Reconocer las emociones, desafíos y expectativas de las personas que llegan o regresan permite construir comunidades más solidarias, respetuosas e inclusivas. La migración y el retorno deben comprenderse

como procesos profundamente humanos que requieren protección jurídica y acompañamiento emocional para garantizar la dignidad y el bienestar (ACNUR y OIM, 2023).

1.2. Migración internacional y retorno en Colombia

Colombia enfrenta dos fenómenos paralelos dentro de la movilidad humana. Por un lado, se presenta la llegada de personas migrantes internacionales, principalmente provenientes de Venezuela. Por otro, se evidencia el retorno de ciudadanos colombianos que residían en otros países y regresan ante diversas circunstancias. Ambos grupos comparten retos significativos relacionados con la integración laboral, el acceso a salud y educación, el reconocimiento de competencias, la estabilidad económica y la regularización migratoria.

Estos procesos generan transformaciones sociales tanto en las familias como en las comunidades receptoras. En el caso de la población retornada, la adaptación puede implicar la reconstrucción de redes de apoyo, la validación de títulos o la inserción en entornos laborales desconocidos. Para la población extranjera, el proceso de integración puede verse marcado por barreras culturales, discriminación, estigmatización y dificultades para acceder a servicios básicos, lo que puede afectar su bienestar emocional y social.

El Estado colombiano ha establecido mecanismos normativos y de acompañamiento como la Política Integral Migratoria (Ley 2136 de 2021) y el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (Decreto 216 de 2021), que buscan garantizar el reconocimiento de derechos, la regularización y la inclusión social. Asimismo, el CONPES 4100 de 2022 orienta acciones interinstitucionales para la atención y la integración de estas poblaciones.

Sin embargo, debido a la magnitud y complejidad del fenómeno migratorio, es necesario fortalecer la articulación entre entidades nacionales y territoriales, así como la participación comunitaria. La implementación de un enfoque psicosocial es fundamental para promover una convivencia armónica, reducir situaciones de vulnerabilidad y acompañar los procesos de adaptación, duelo migratorio y reconstrucción del proyecto de vida de las personas migrantes y retornadas.

1.3. Impactos psicosociales de la migración

La experiencia migratoria representa un cambio profundo en la vida de las personas, ya que implica dejar atrás el entorno conocido, las redes de apoyo y, en muchos casos, los proyectos personales. Estos procesos generan efectos emocionales, sociales y culturales tanto en quienes migran como en las comunidades involucradas. En este contexto, surgen emociones ambivalentes: esperanza ante nuevas oportunidades, pero también incertidumbre, ansiedad y tristeza asociadas a la separación y al desarraigo (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022).

Desde una perspectiva psicosocial, la migración implica procesos de adaptación individual y colectiva. Quienes migran deben ajustarse a nuevos contextos culturales, aprender normas sociales diferentes y desarrollar estrategias para integrarse en las comunidades receptoras. Este proceso puede generar duelo migratorio, entendido como la reacción emocional ante las pérdidas vinculadas al cambio de país o entorno (Achotegui, 2019). A su vez, las comunidades de acogida también experimentan transformaciones al integrar personas con costumbres, acentos y visiones diversas, lo que puede dar lugar a tensiones, pero también a oportunidades para el aprendizaje intercultural.

Los impactos psicosociales de la migración se manifiestan en diferentes niveles:

- ✓ **Individual:** se relacionan con la salud mental, las emociones y la autoestima. Se pueden presentar síntomas como ansiedad, depresión o estrés postraumático, especialmente cuando la migración es forzada.
- ✓ **Familiar:** las dinámicas afectivas pueden alterarse debido a la separación o a la reunificación tardía, generando sobrecarga emocional y cambios en los roles.
- ✓ **Comunitario:** las comunidades receptoras pueden enfrentar desafíos de convivencia, prejuicios o xenofobia, mientras que las comunidades de origen pueden experimentar fragmentación social.

El acompañamiento psicosocial se convierte en un recurso fundamental para promover el bienestar y la integración. Este enfoque facilita el apoyo emocional, el acceso a redes de ayuda y el fortalecimiento de la resiliencia tanto en las personas migrantes como en las comunidades de acogida (PNUD, 2023).

Comprender estos impactos resulta esencial para diseñar intervenciones pertinentes que promuevan la inclusión social y la salud mental. Reconocer las emociones, las pérdidas y las fortalezas que acompañan a la migración constituye el primer paso hacia una atención humana, integral y basada en derechos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022).

1.4. Respuesta institucional frente al fenómeno migratorio

El Estado colombiano, junto con organismos internacionales y entidades territoriales, ha diseñado una respuesta integral para afrontar los desafíos de la

migración, orientada a garantizar derechos y promover la integración social de personas migrantes, retornadas y comunidades de acogida (DNP, 2022).

Esta respuesta se organiza a través de:

- a) Gobernanza migratoria: basada en los principios del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (ONU, 2018). Se promueve la coordinación entre niveles de gobierno y la cooperación con organizaciones como:
 - ✓ Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
 - ✓ Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
 - ✓ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Estas instituciones apoyan acciones de regularización, atención psicosocial, fortalecimiento institucional y convivencia social (ACNUR & OIM, 2023).

- b) Atención en salud física y mental: el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Circular 035 de 2022 para orientar la atención integral, especialmente en salud mental y acompañamiento psicosocial. Las entidades territoriales desarrollan estrategias para:
 - ✓ Prevención de la violencia.
 - ✓ Apoyo emocional.
 - ✓ Fortalecimiento de la convivencia comunitaria.
- c) Rutas de protección y restablecimiento de derechos: entidades como Migración Colombia, ICBF, Cancillería y la Unidad para las Víctimas implementan programas dirigidos a:
 - ✓ Regularización documental.

- ✓ Protección de niños, niñas y adolescentes.
- ✓ Restablecimiento de derechos.
- ✓ Reducción de riesgos psicosociales.

En síntesis, la respuesta institucional trasciende la asistencia inicial y se proyecta hacia la integración social a mediano y largo plazo. La articulación interinstitucional ha permitido fortalecer un modelo de atención centrado en la dignidad humana, el respeto por los derechos y la construcción de comunidades inclusivas y resilientes (ACNUR & OIM, 2023).

2. Marco normativo internacional sobre migración y atención psicosocial

Los lineamientos internacionales que protegen los derechos de las personas migrantes y refugiadas surgen del compromiso de la comunidad internacional por garantizar la dignidad, la libertad y la seguridad de quienes se desplazan fuera de su país de origen. Su finalidad es orientar a los Estados en la formulación de políticas públicas, mecanismos de protección y estrategias de atención integral que reconozcan la movilidad humana como un derecho y no como un delito (ONU, 2018).

El derecho internacional de los derechos humanos constituye la base jurídica para la protección de la población en situación de movilidad. Instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su Protocolo de 1967, así como la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), establecen principios clave en la materia. Estos marcos promueven la igualdad, el acceso a servicios esenciales, el principio de no discriminación y la protección especial de grupos vulnerables (ACNUR, 2017).

Desde el enfoque de atención psicosocial, estos tratados representan guías éticas que orientan el acompañamiento a las personas migrantes. La intervención psicosocial con enfoque de derechos implica comprender las experiencias individuales, reconocer los impactos emocionales y sociales del proceso migratorio y promover el bienestar integral y la integración comunitaria (PNUD, 2023).

Estos lineamientos internacionales inspiran la legislación nacional y la implementación de políticas públicas. En Colombia, su adopción se refleja en la Política Integral Migratoria (Ley 2136 de 2021) y en la articulación con organismos internacionales como la OIM, ACNUR y el PNUD. Gracias a estas alianzas se fortalecen los programas de inclusión, salud mental y protección de los derechos de las personas migrantes y retornadas (DNP, 2022).

2.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948)

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) como el pilar fundamental del derecho internacional en materia de dignidad humana, igualdad y libertad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establece que todas las personas, sin distinción de nacionalidad, raza o condición social, poseen derechos inherentes que deben ser respetados y garantizados por los Estados (ONU, 1948).

Además, la DUDH tiene un papel central en los procesos migratorios porque afirma el derecho de toda persona a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a él (artículo 13). Este principio reconoce la libertad de movimiento como un derecho humano esencial y sirve de base para el desarrollo posterior de tratados y políticas internacionales sobre migración, refugio y protección humanitaria.

Asimismo, la Declaración proclama el derecho a buscar asilo en otros países (artículo 14), lo cual respalda los mecanismos de protección internacional para las personas que huyen de la persecución, los conflictos o las crisis sociales. Estos artículos orientan la actuación de los Estados y las organizaciones internacionales en la creación de políticas de acogida, regularización y atención psicosocial a la población migrante y refugiada (ACNUR, 2017).

Desde una perspectiva psicosocial, la DUDH también resalta el valor de la dignidad y la igualdad como fundamentos para la convivencia y la integración, en la práctica, esto significa que cualquier proceso de atención o acompañamiento a población migrante debe garantizar el respeto por su identidad cultural, su bienestar emocional y sus derechos básicos. Este enfoque contribuye a construir entornos seguros y solidarios donde las personas puedan reconstruir sus proyectos de vida.

2.2. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y Protocolo (1967)

Dentro de los lineamientos más importantes en materia de protección humanitaria se encuentran la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra en 1951, y su Protocolo de 1967, que amplió su alcance geográfico y temporal. Estos instrumentos, elaborados bajo el liderazgo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), establecen el marco legal para la protección de quienes se ven obligados a abandonar su país debido a la persecución, la violencia o los conflictos (ACNUR, 2017).

La Convención de 1951 define a la persona refugiada como aquella que, debido a fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera de su

país de origen y no puede o no quiere acogerse a la protección de dicho Estado (ONU, 1951). Esta definición se convirtió en el estándar internacional para la identificación y protección de las personas en situación de desplazamiento forzado.

El Protocolo de 1967 eliminó las limitaciones geográficas y temporales establecidas en la Convención original, permitiendo que su aplicación abarque a refugiados de cualquier parte del mundo, sin restricción de fecha ni región. A partir de esta modificación, la protección internacional adquirió un carácter universal, ajustándose a las nuevas dinámicas migratorias y humanitarias que surgieron en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial (ONU, 1967).

En el caso colombiano, la ratificación de la Convención y el Protocolo implica el compromiso estatal de garantizar los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Este compromiso se refleja en la Ley 2136 de 2021, que integra los principios de protección internacional dentro de la Política Integral Migratoria, así como en la articulación con el ACNUR para la atención humanitaria y psicosocial de esta población (Congreso de la República de Colombia, 2021).

2.3. Convención sobre los Derechos del Niño (1989)

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, constituye el instrumento jurídico internacional más relevante para la protección integral de la niñez. Este tratado establece que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación en condiciones de igualdad y sin discriminación (UNICEF, 1989).

El enfoque de la Convención reconoce a la niñez como titular de derechos, lo cual implica la obligación de los Estados de garantizar su bienestar físico, emocional y social. En los contextos migratorios esta protección adquiere especial relevancia, debido a que muchos menores enfrentan riesgos como la separación familiar, la explotación laboral, la ausencia de documentación o el acceso limitado a servicios educativos y de salud (ACNUR, 2017).

La CDN incorpora principios esenciales que orientan la intervención con la niñez migrante y refugiada:

- ✓ Interés superior del niño: todas las decisiones deben priorizar su bienestar y desarrollo integral.
- ✓ No discriminación: los derechos se garantizan sin importar origen, nacionalidad o situación migratoria.
- ✓ Derecho a la identidad: se reconoce el acceso a un nombre, nacionalidad y vínculos familiares.
- ✓ Derecho a la protección: los Estados deben prevenir y atender cualquier forma de violencia, abuso o explotación.

Desde el enfoque psicosocial, la Convención insta a garantizar no solo protección jurídica, sino también acompañamiento emocional, integración comunitaria y apoyo educativo. La ruptura del entorno afectivo, los cambios culturales y la exposición a situaciones adversas pueden afectar el desarrollo socioemocional, por lo que se requieren acciones que fortalezcan la resiliencia y generen espacios seguros para la reconstrucción de su proyecto de vida (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022).

Colombia ratificó esta Convención mediante la Ley 12 de 1991, incorporándola a su marco jurídico. A su vez, el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) desarrolla y amplía sus principios, asegurando la protección integral de niños, niñas y adolescentes en contextos de migración, desplazamiento o retorno, orientando así la acción del Estado hacia el reconocimiento y garantía plena de sus derechos (Congreso de la República de Colombia, 2006).

2.4. Enfoque de protección y dignidad humana (ACNUR)

El enfoque de protección y dignidad humana promovido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se reconoce como un principio orientador de toda acción humanitaria y psicosocial dirigida a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Este enfoque parte del reconocimiento de que toda persona tiene derecho a una vida digna, independientemente de su nacionalidad, condición migratoria o situación social (ACNUR, 2017).

El ACNUR define la protección internacional como el conjunto de acciones destinadas a garantizar los derechos fundamentales de quienes se ven forzados a huir de su país. Estas acciones comprenden la prevención de violaciones de derechos humanos, el acceso a procedimientos de asilo, el principio de no devolución, la reunificación familiar y la asistencia humanitaria en condiciones seguras y respetuosas de la dignidad humana (ONU, 2018). Con ello, se busca no solo brindar seguridad jurídica, sino también restablecer el sentido de humanidad, pertenencia y esperanza en las personas que han sufrido violencia, desarraigo o pérdida.

Desde la perspectiva psicosocial, este enfoque implica una atención integral que considere a cada individuo como sujeto activo de derechos, capaz de reconstruir su proyecto de vida. En este sentido, se promueve:

- ✓ El reconocimiento de la historia y las experiencias vividas.
- ✓ La validación de las emociones y el fortalecimiento de capacidades.
- ✓ La promoción de la autonomía y la participación en la comunidad.

La protección y la dignidad humana se asumen como una responsabilidad ética y social. Garantizar condiciones de vida dignas contribuye a la convivencia pacífica, previene la discriminación y favorece la construcción de comunidades inclusivas y resilientes, en las que todas las personas puedan desarrollar plenamente su potencial humano (ACNUR, 2023).

3. Marco normativo nacional de la política migratoria colombiana y atención psicosocial

El marco normativo nacional de la política migratoria colombiana y atención psicosocial busca dar respuesta a los desafíos que plantea la movilidad humana, garantizando la inclusión, la regularización, la protección y el acompañamiento psicosocial de las personas migrantes, retornadas y comunidades de acogida (Congreso de la República de Colombia, 2021).

A partir de 2012, el país ha consolidado una arquitectura jurídica migratoria articulada en los siguientes instrumentos:

Tabla 1. Principales normas del marco normativo nacional

Normativa	Descripción
Ley 2136 de 2021 – Política Integral Migratoria (PIM).	Establece los principios, lineamientos y estrategias para la gestión integral de la migración en Colombia, reconociendo la

Normativa	Descripción
	movilidad humana como un fenómeno social, económico y cultural. (Art. 1 y 2).
Decreto 216 de 2021 – Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV).	Crea un régimen temporal de regularización para migrantes venezolanos, promoviendo su acceso a derechos y servicios. (Art. 1 y 4).
Ley 1565 de 2012 – Ley de Retorno.	Implementa el Sistema Nacional de Atención y Reintegración para el Retorno, garantizando acompañamiento integral a los colombianos que regresan al país. (Art. 1 y 6).
Ley 1098 de 2006 – Código de Infancia y Adolescencia.	Establece la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, incluidos aquellos en situación de migración. (Art. 1 y 7).
Ley 2460 de 2025 – Política Nacional de Salud Mental.	Define el marco para garantizar el acceso integral, equitativo y continuo a la salud mental. (Art. 1).
Decreto 0729 de 2025 – Lineamientos de Atención Psicosocial.	Reglamenta la Ley 2460 de 2025 e implementa estrategias técnicas y

Normativa	Descripción
	operativas para el acompañamiento psicosocial en todo el territorio. (Art. 3).

Estas normas constituyen uno de los marcos legales más robustos de América Latina en materia migratoria. Su propósito común es proteger los derechos de las personas en movilidad, promover su integración y garantizar una respuesta institucional coordinada entre los sectores de salud, educación, empleo y protección social (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2022).

Desde el enfoque psicosocial, se reconoce que la migración conlleva impactos emocionales, familiares y comunitarios. Por ello, la atención debe orientarse a fortalecer la resiliencia, prevenir la exclusión y promover la convivencia. En este sentido, la Circular 035 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social orienta la acción territorial para ofrecer atención integral en salud mental, prevención de violencia y apoyo emocional a personas migrantes y comunidades receptoras (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022).

De esta manera, el marco normativo nacional se articula con los compromisos internacionales asumidos por Colombia, especialmente los derivados del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (ONU, 2018) y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951). Esta articulación refuerza el principio de corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional para garantizar la dignidad, la inclusión y la protección integral de las personas en movilidad humana.

3.1. Política Integral Migratoria (Ley 2136 de 2021)

La Política Integral Migratoria (PIM) define el marco normativo, institucional y operativo que orienta la gestión migratoria en Colombia, promoviendo una migración segura, ordenada, regular y con enfoque de derechos humanos (Congreso de la República de Colombia, 2021).

Esta política surge como respuesta a los desafíos sociales, económicos y humanitarios asociados al incremento de los flujos migratorios, especialmente provenientes de Venezuela. Su objetivo es garantizar que las personas migrantes, retornadas y colombianas en el exterior accedan a derechos, servicios básicos y oportunidades de participación social y económica, mediante la articulación del Estado, las entidades territoriales y la cooperación internacional (DNP, 2022).

Además, la PIM impulsa la integración y la convivencia, rechaza la xenofobia, el racismo y cualquier forma de discriminación, y reconoce la migración como oportunidad para el desarrollo nacional.

La Política Integral Migratoria se estructura en seis ejes estratégicos:

- ✓ Cooperación internacional y corresponsabilidad.
- ✓ Derechos humanos y enfoque diferencial.
- ✓ Integración social, económica y cultural.
- ✓ Gobernanza migratoria y coordinación interinstitucional.
- ✓ Gestión de fronteras y movilidad humana.

Desde el enfoque psicosocial, estos ejes incluyen acciones orientadas a:

- 1) Fortalecer la salud mental y el bienestar emocional de las personas migrantes.

- 2) Prevenir violencias y prácticas discriminatorias.
- 3) Impulsar el tejido social y el sentido de pertenencia en las comunidades de acogida.
- 4) Promover la autonomía y la inclusión mediante estrategias de acompañamiento integral.

Para su implementación, la PIM se articula a través del Sistema Nacional de Migraciones, la Comisión Intersectorial para las Migraciones y la Mesa Nacional de Sociedad Civil, asegurando la coordinación entre sectores e instituciones en todos los territorios.

En conjunto, la Ley 2136 de 2021 constituye el pilar jurídico de la política migratoria colombiana y un instrumento clave para garantizar la dignidad humana, la inclusión y la cohesión social de quienes se encuentran en situación de movilidad.

3.2. Estatuto Temporal de Protección (Decreto 216 de 2021)

El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, establecido mediante el Decreto 216 de 2021 del 1 de marzo de 2021, constituye una de las medidas más relevantes adoptadas por el Estado colombiano para regularizar la situación de migrantes provenientes de Venezuela. Busca garantizar su acceso a derechos fundamentales y promover su integración social, económica y cultural (Presidencia de la República de Colombia, 2021).

El artículo 1 define su objeto de la siguiente manera:

“Crear el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos bajo régimen de protección temporal, con el fin de brindar una respuesta humanitaria, ordenada y segura al fenómeno migratorio proveniente de la República Bolivariana de

Venezuela, y permitir el tránsito hacia un régimen migratorio ordinario". (Presidencia de la República de Colombia, 2021, art. 1).

Este Estatuto otorga una solución temporal de regularización migratoria a quienes se encontraban en el territorio nacional en situación irregular. A través del Permiso por Protección Temporal (PPT), las personas beneficiarias, según Migración Colombia (2022), pueden:

- ✓ Acceder al mercado laboral.
- ✓ Ingresar al sistema educativo.
- ✓ Recibir atención en salud.
- ✓ Participar en programas sociales del Estado.

Según el artículo 4 del decreto, la vigencia del ETPV es de diez (10) años, tiempo durante el cual las personas favorecidas pueden hacer la transición hacia un régimen migratorio ordinario, conforme a los trámites establecidos por el Estado (Presidencia de la República de Colombia, 2021, art. 4).

Desde una perspectiva psicosocial, el ETPV trasciende lo administrativo, ofrece estabilidad, seguridad jurídica y una base sólida para la reconstrucción del proyecto de vida. Esta protección favorece el bienestar emocional, facilita el acceso a redes de apoyo, promueve la integración y contribuye a la dignidad de las personas migrantes.

3.3. Ley del Retorno (Ley 1565 de 2012)

La Ley del Retorno tiene como propósito facilitar la reintegración social, económica y emocional de los colombianos que regresan del exterior de manera voluntaria, reconociendo este proceso como un fenómeno migratorio que requiere

acompañamiento integral y enfoque diferencial (Congreso de la República de Colombia, 2012).

El artículo 1 define el objeto de esta ley al señalar que:

“La presente ley tiene por objeto crear y regular el Sistema Nacional de Atención y Reintegración para el Retorno, con el fin de garantizar la atención, orientación y acompañamiento a los colombianos que deciden regresar voluntariamente al país”.
(Congreso de la República de Colombia, 2012, art. 1).

Con base en este mandato, el Estado colombiano desarrolla estrategias que facilitan la inclusión social, laboral y productiva de la población retornada, priorizando a las personas en situación de vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado o con necesidades específicas.

¿Cómo funciona el retorno según la Ley 1565 de 2012?

El proceso para acceder a los beneficios de esta ley comprende los siguientes pasos:

- 1) Registro del retorno ante la Cancillería o consulados para ser reconocido oficialmente como retornado.
- 2) Clasificación según tipo de retorno, priorizando a población con vulnerabilidad social, víctimas del conflicto y personas con necesidades especiales.
- 3) Orientación y acompañamiento institucional para acceder a beneficios, rutas de empleo y programas sociales.
- 4) Integración social y económica en el territorio, mediante programas formativos, productivos y apoyo psicosocial.

La norma contempla medidas destinadas a promover estabilidad y bienestar, tales como:

- ✓ Apoyo para la inserción laboral y productiva.
- ✓ Acceso preferente a programas educativos y a la formación del SENA.
- ✓ Exenciones tributarias para el ingreso de menaje y herramientas de trabajo.
- ✓ Acompañamiento en acceso a servicios sociales y atención en salud mental.
- ✓ Fortalecimiento de proyectos de vida y redes familiares y comunitarias.

Estos beneficios se articulan entre entidades nacionales y territoriales encargadas de la gestión migratoria y del bienestar social (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2021).

¿Qué es el Sistema Nacional de Atención y Reintegración para el Retorno?

El artículo 1 crea este Sistema como el mecanismo de coordinación entre instituciones públicas para atender las necesidades de la población retornada. Se estructura a través de:

- ✓ Cancillería: coordinación general y registro del retornado.
- ✓ Ministerio del Trabajo: empleabilidad y emprendimiento.
- ✓ SENA: formación para el trabajo y certificación de competencias.
- ✓ Entidades territoriales: integración social y vinculación comunitaria.

El artículo 6 define a la persona retornada como aquella que, tras residir en el exterior, fija nuevamente su residencia en Colombia, lo cual habilita el acceso a los beneficios previstos (Congreso de la República de Colombia, 2012, art. 6).

Desde el enfoque psicosocial en el retorno, la norma reconoce que la vuelta al país implica un proceso de readaptación emocional y social, ante posibles experiencias de:

- ✓ Desarraigo.
- ✓ Duelo migratorio.
- ✓ Pérdida de redes de apoyo.
- ✓ Dificultades de integración laboral o comunitaria.

Con este enfoque, la ley promueve la orientación psicosocial, la atención en salud mental y el fortalecimiento comunitario para asegurar un retorno digno, sostenible y respetuoso de los derechos humanos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022).

3.4. Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006)

Es considerado como el marco normativo que protege integralmente los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en Colombia, incluyendo aquellos que se encuentran en situación de movilidad humana. Esta Ley se basa en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y promueve la garantía, el restablecimiento y la exigibilidad de los derechos de la niñez, sin discriminación alguna (Congreso de la República de Colombia, 2006).

El artículo 1 define su objeto de manera clara: "La presente ley tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las

niñas y los adolescentes, garantizando el ejercicio de sus derechos y libertades”.

(Congreso de la República de Colombia, 2006, art. 1).

El artículo 7 determina que debe prevalecer el interés superior del niño en cualquier decisión o actuación pública o privada que afecte sus derechos, lo que implica que, en contextos de migración o retorno, la atención, acompañamiento o traslado de menores se debe realizar priorizando su bienestar físico, emocional y social (Congreso de la República de Colombia, 2006, art. 7).

Desde este marco legislativo se promueve un enfoque de protección integral, que orienta la actuación del Estado frente a niños, niñas y adolescentes migrantes o retornados mediante acciones como:

- ✓ Garantía del acceso a derechos esenciales como salud, educación y alimentación.
- ✓ Acompañamiento psicosocial para fortalecer la estabilidad emocional y el sentido de seguridad.
- ✓ Atención inmediata a menores no acompañados o en riesgo por medio de rutas de protección especial.
- ✓ Participación e inclusión comunitaria para favorecer procesos de adaptación cultural y social.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en articulación con las entidades territoriales y los sectores sociales, tiene la responsabilidad de activar estas medidas y asegurar el restablecimiento de derechos de manera oportuna (ICBF, 2023).

De esta manera, Colombia consolida un enfoque humanitario y garantista, que integra protección jurídica, acompañamiento institucional y apoyo psicosocial en coherencia con los estándares internacionales definidos por la ONU y UNICEF.

3.5. Política Nacional de Salud Mental (Ley 2460) y lineamientos de atención psicosocial (Decreto 0729 de 2025)

Mediante esta Ley se adopta la Política Nacional de Salud Mental en Colombia, y el Decreto 0729 de 2025 reglamenta los lineamientos para la atención psicosocial con enfoque diferencial. Estas normas consolidan un marco legal que reconoce la salud mental como un derecho fundamental y una condición esencial para el bienestar integral de las personas y las comunidades (Congreso de la República de Colombia, 2025).

El artículo 1 establece: “La presente ley tiene por objeto establecer los principios, objetivos, estrategias e instrumentos para la promoción, prevención, atención y rehabilitación en salud mental, así como la garantía del acceso integral y equitativo a los servicios de salud mental en el territorio nacional.” (Congreso de la República de Colombia, 2025, art. 1).

La Política Nacional de Salud Mental promueve un modelo comunitario e integral que articula los sectores de salud, educación, trabajo y protección social, priorizando poblaciones vulnerables como las personas migrantes, retornadas y comunidades de acogida, quienes enfrentan factores de riesgo asociados al desarraigo, la pérdida, la adaptación cultural y la exclusión social (Ministerio de Salud y Protección Social, 2025).

El Decreto 0729 de 2025, en su artículo 3, define los lineamientos técnicos y operativos para implementar la política en los territorios. Estos lineamientos se organizan en los siguientes componentes:

- ✓ Promoción de la convivencia y la salud mental comunitaria.
- ✓ Prevención de violencias, duelos migratorios y riesgos psicosociales.
- ✓ Atención psicosocial integral y continua, con equipos interdisciplinarios.
- ✓ Articulación intersectorial, con enfoque diferencial y basado en derechos humanos.
- ✓ Fortalecimiento de redes familiares y comunitarias.

Las entidades territoriales deben incluir estas estrategias en sus planes de salud, garantizando cobertura y seguimiento especialmente a niños, adolescentes, mujeres migrantes y víctimas del conflicto armado (Ministerio de Salud y Protección Social, 2025, art. 3).

Desde el enfoque psicosocial, esta política reconoce que la salud mental implica mucho más que tratar trastornos. Para la población migrante y retornada, incluye:

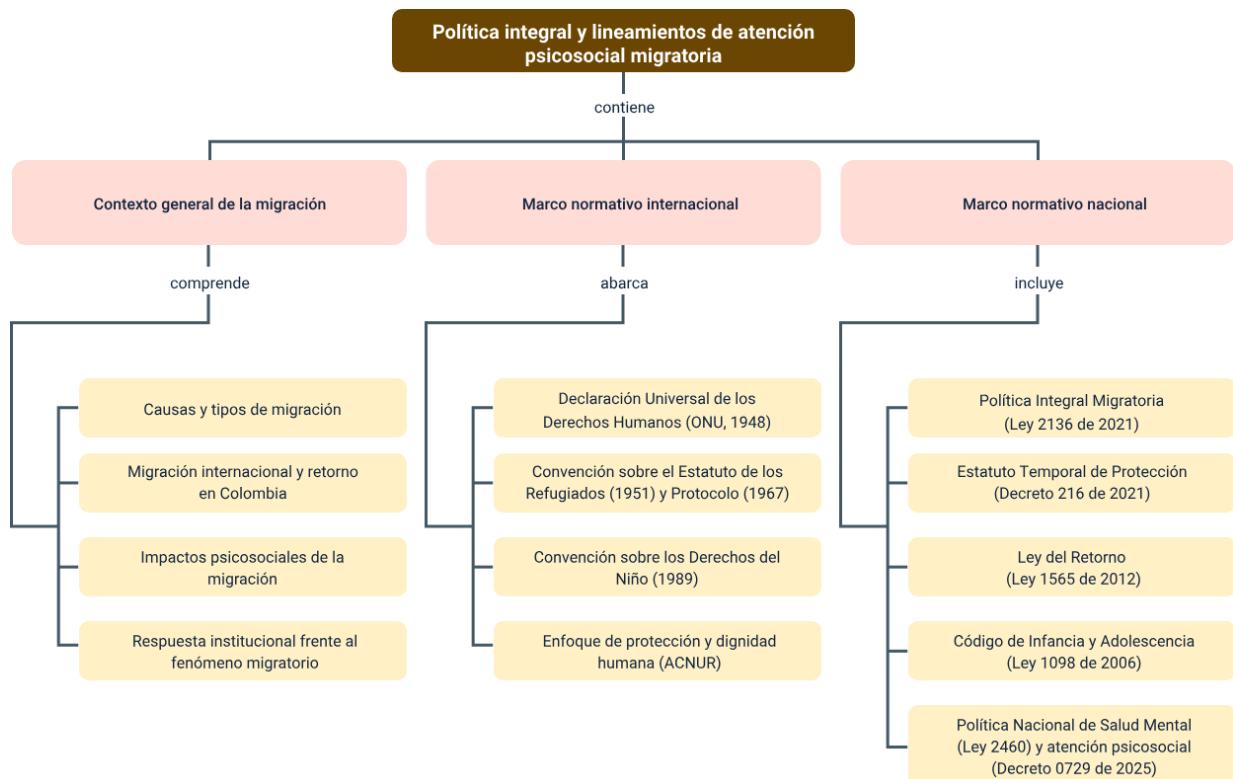
- ✓ Acompañamiento emocional en procesos de duelo y adaptación.
- ✓ Acceso a orientación familiar y apoyo social.
- ✓ Espacios de escucha y participación comunitaria.
- ✓ Desarrollo de capacidades para la resiliencia y el sentido de pertenencia.

La Ley 2460 y el Decreto 0729 se articulan con la Política Integral Migratoria (Ley 2136 de 2021), la Circular 035 de 2022 y programas de cooperación internacional liderados por ACNUR, OIM y OPS, fortaleciendo la respuesta intersectorial en salud mental.

Este marco normativo representa un avance significativo hacia una atención más humana, equitativa y territorialmente accesible, especialmente para las comunidades migrantes y de acogida.

Síntesis

El componente formativo aborda el fenómeno de la migración desde su contexto social y emocional, analizando sus causas, tipos y los impactos psicosociales que experimentan tanto las personas migrantes como las comunidades de acogida. Además, presenta el marco normativo internacional y nacional que garantiza la protección de sus derechos, destacando la importancia del acompañamiento institucional y la atención psicosocial con enfoque diferencial. De esta manera, se promueve una comprensión integral de la movilidad humana y se fortalece la capacidad para brindar apoyo adecuado, inclusivo y respetuoso de la dignidad humana en los procesos de integración y retorno.



Material Complementario

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
Migración internacional y retorno en Colombia	Colombia Nos Une. (2025). ¿Qué es el Retorno y cómo funciona en Colombia? [Video]. YouTube.	Video	https://www.youtube.com/watch?v=OaWfPqoyeLI
Política Nacional de Salud Mental (Ley 2460) y lineamientos de atención psicosocial (Decreto 0729 de 2025)	LVAbrazarte. (2025). ¿Qué cambia con la nueva Ley 2460 de 2025 en salud mental? [Video]. YouTube.	Video	https://www.youtube.com/watch?v=almzsy9deM&t=22s

Glosario

ACNUR: alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Organismo internacional que protege y asiste a las personas desplazadas y refugiadas en el mundo.

Atención psicosocial: conjunto de acciones orientadas a promover el bienestar emocional, social, familiar y comunitario de las personas afectadas por situaciones adversas.

Circular: comunicación oficial que contiene orientaciones técnicas o directrices para aplicar políticas públicas en instituciones.

Código de Infancia y Adolescencia: norma colombiana que protege integralmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Ley 1098 de 2006).

Comunidad de acogida: población residente en un territorio que recibe y convive con personas migrantes o retornadas.

Convención sobre los Derechos del Niño: tratado internacional de la ONU (1989) que garantiza los derechos de la niñez en los Estados firmantes.

Decreto: disposición normativa emitida por el poder ejecutivo para reglamentar leyes o establecer medidas administrativas.

Dignidad humana: principio que reconoce el valor intrínseco de todas las personas y constituye la base de los derechos humanos.

Ley del Retorno: norma colombiana (Ley 1565 de 2012) que promueve la reintegración social y económica de los colombianos que regresan del exterior.

Migración: movimiento de personas de un lugar a otro, dentro o fuera de un país, con el propósito de residir temporal o permanentemente.

Población migrante: personas que se trasladan de su lugar de origen a otro territorio por causas económicas, sociales, políticas o ambientales.

Política Integral Migratoria: marco legal colombiano (Ley 2136 de 2021) que regula la gestión de la migración y garantiza la protección de los derechos humanos.

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados: documento complementario a la Convención de 1951, que amplía la protección internacional a las personas refugiadas.

Refugiado: persona que, debido a persecución, violencia o conflicto, se ve obligada a abandonar su país y solicita protección internacional.

Salud mental: estado de bienestar en el cual la persona reconoce sus capacidades, afronta el estrés de la vida y contribuye a su comunidad.

Referencias bibliográficas

Achotegui, J. (2019). El duelo migratorio: La necesidad de una nueva psicopatología. Editorial Herder.

ACNUR & OIM. (2023). Atención psicosocial y protección integral para población migrante y refugiada: Recomendaciones para los Estados. Naciones Unidas.

ACNUR. (2017). Tendencias globales: Desplazamiento forzado en 2017. Agencia de la ONU para los Refugiados. <https://www.acnur.org/sites/default/files/legacy-pdf/5b2956a04.pdf>

Congreso de la República de Colombia. (1991). Ley 12 de 1991. Diario Oficial.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=10579>

Congreso de la República de Colombia. (2006). Ley 1098 de 2006. Diario Oficial.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=22106>

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1565 de 2012. Diario Oficial.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48662>

Congreso de la República de Colombia. (2021). Ley 2136 de 2021. Diario Oficial.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=168067>

Congreso de la República de Colombia. (2025). Ley 2460 de 2025. Diario Oficial.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=260636>

Departamento Nacional de Planeación. (2022). Documento CONPES 4100: Estrategia para la integración de la población migrante venezolana como factor de desarrollo para el país.

<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4100.pdf>

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2023). Lineamientos para la protección y restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. ICBF.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). Línea base de salud mental para poblaciones migrantes. Ministerio de Salud y Protección Social, Colombia.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2025). Decreto 0729 de 2025.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-0729-25-junio-2025.pdf>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2025). Resolución 401 de 2025.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-0401-de-2025.pdf>

Naciones Unidas. (1951). Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

ACNUR. <https://www.acnur.org/5b0766944.pdf>

Naciones Unidas. (1967). Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. ACNUR.

Naciones Unidas. (s. f.). Declaración Universal de Derechos Humanos.

<https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

Naciones Unidas. (s. f.). Migración internacional. <https://www.un.org/es/global-issues/migration>

ONU-HABITAT. (2025). Soluciones Duraderas al Desplazamiento Interno.

<https://onu-habitat.org/index.php/soluciones-duraderas-al-desplazamiento-interno>

Organización de las Naciones Unidas. (2018). Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. ONU.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2019). Glosario de la OIM sobre Migración. <https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml-34-glossary-es.pdf>

Presidencia de la República de Colombia. (2021). Decreto 216 de 2021. https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_0216_2021.htm

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2023). Informe sobre desarrollo humano y movilidad humana. PNUD.

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. (1967). Naciones Unidas. UNICEF. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Naciones Unidas. <https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino>

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Diana Rocío Posos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Carolina Yusunguaira Ceballos	Experta temática	Centro de Formación de Talento Humano en Salud - Regional Distrito Capital
Eliana Milena Buitrago Umaña	Asesora metodológica	Centro de Formación de Talento Humano en Salud - Regional Distrito Capital
Viviana Esperanza Herrera Quiñonez	Evaluadora instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Oscar Ivan Uribe Ortiz	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jose Yobani Penagos Mora	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Sebastian Trujillo Afanador	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Diego Fernando Velasco Güiza	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Eduardo Rueda Peña	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Bustos Gómez	Validador y vinculador de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima